Naciones Unidas A/73/374–S/2018/824



Distr. general
10 de septiembre de 2018
Español
Original: inglés

Asamblea General
Septuagésimo tercer período de sesiones
Tema 40 del programa
La situación en el Afganistán

Consejo de Seguridad
Septuagésimo tercer año

La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 68/11 de la Asamblea General y la resolución 2405 (2018) del Consejo de Seguridad, en las que se solicitó al Secretario General que informara cada tres meses sobre la evolución de la situación en el Afganistán.

2. En el informe se presentan datos actualizados sobre las actividades que han llevado a cabo las Naciones Unidas en el Afganistán, incluidas las iniciativas políticas y de asistencia humanitaria, desarrollo y derechos humanos, desde la publicación del informe anterior, el 6 de junio de 2018 (A/72/888-S/2018/539).

II. Acontecimientos más importantes

3. Se intensificó la movilización política a medida que los grupos de la oposición formaron coaliciones antes de las elecciones parlamentarias, programadas para el 20 de octubre. Un grupo heterogéneo de partidos políticos siguió exigiendo reformas electorales, y algunos amenazaron con boicotear las elecciones si no se atendían sus exigencias. Tras una larga serie de negociaciones con el Gobierno, el Vicepresidente primero, Abdul Rashid Dostum, regresó al Afganistán tras más de un año de residencia en Turquía. Los órganos de gestión electoral siguieron adelante con los preparativos de las elecciones parlamentarias, aunque se propuso que se aplazaran las elecciones a los consejos de distrito, inicialmente programadas para la misma fecha, a causa del escaso número de candidaturas presentadas. El Gobierno y los talibanes aplicaron durante la festividad de Eid al-Fitr alto el fuego solapados, a raíz de lo cual a lo largo de tres días disminuyó la violencia y los partidarios del Gobierno y de los talibanes celebraron reuniones públicas. Sin embargo, los talibanes rechazaron los llamamientos a que se prorrogara el alto el fuego y ambas partes reanudaron las acciones ofensivas. El Gobierno declaró para la festividad de Eid al-Adha un segundo

18-14440 (S) 110918 110918



alto el fuego sujeto a que los talibanes hicieran lo mismo, pero no lo hicieron. La seguridad se mantuvo inestable con los ataques lanzados en la provincia de Ghazni y en zonas del norte y con el mantenimiento del altísimo número de bajas civiles. El Gobierno siguió afanándose por la reforma en preparación de la Conferencia Ministerial sobre el Afganistán, que se celebrará en Ginebra el 28 de noviembre, ultimó su política subnacional en materia de gobernanza y puso fin a un proceso de contratación en masa de funcionarios públicos por méritos. La sequía, que siguió destruyendo los medios de vida, provocó nuevos desplazamientos de la población en el oeste del Afganistán. En 2018 se había registrado hasta la fecha un máximo histórico de regresos de la República Islámica del Irán, mientras que los regresos del Pakistán siguieron siendo relativamente escasos.

A. Acontecimientos políticos

4. La movilización de la oposición política descrita en mi anterior informe se intensificó a medida que se aproximaban las elecciones parlamentarias y quedaban más claras las dificultades del proceso. Aunque antes parecía que la movilización había tenido como fin participar en las elecciones, los partidos de la oposición empezaron a criticar cada vez más el proceso en sí. Los partidos acogieron con especial escepticismo el anuncio de la Comisión Electoral Independiente de que se habían inscrito más de 9 millones de votantes. En el ámbito político dominante empezaron a escucharse llamamientos a favor de una administración provisional que sustituyera al Gobierno de Unidad Nacional, posición antes marginal.

5. El malestar suscitado por los preparativos electorales se concentró principalmente en el norte, donde las condiciones de seguridad se siguieron deteriorando y algunas figuras de la oposición acusaron al Gobierno de tramar deliberadamente privaciones de los derechos de las comunidades del norte. Esa percepción se agudizó cuando fuerzas gubernamentales detuvieron el 2 de julio a Nezamuddin Qaysari, jefe de la policía del distrito e íntimo colaborador del Sr. Dostum, en la provincia de Faryab. La detención levantó en esta provincia, de mayoría uzbeka, protestas que se propagaron con rapidez a otras provincias del norte, entre ellas Balj, Jowzjan, Kunduz, Samangan, Sari Pul y Takhar. Los manifestantes exigieron la puesta en libertad del Sr. Qaysari y el regreso del Sr. Dostum, que llevaba residiendo en Turquía desde mayo de 2017, y algunos advirtieron de que boicotearían las elecciones y formarían un gobierno autónomo si no se atendían sus exigencias. Cuando el Gobierno se negó a acceder a las exigencias, los manifestantes empezaron a bloquear la carretera que une Kabul con Mazar-e Sharif en la provincia de Samangan, obligaron a que se cerraran las oficinas provinciales de la Comisión Electoral Independiente en seis provincias y bloquearon la carretera que venía del importante puerto terrestre de Maymana. Al cabo de dos semanas de inestabilidad en aumento, el Gobierno empezó a negociar con el partido político Junbesh-i Milli el regreso del Vicepresidente primero. En el marco de las negociaciones, el 21 de julio el Sr. Qaysari fue excarcelado y trasladado a una ubicación convenida mutuamente en compañía de guardas de la Dirección Nacional de Seguridad y de Junbesh-i Milli.

6. Al término de negociaciones mantenidas con representantes del Palacio Presidencial, el Sr. Dostum regresó a Kabul el 22 de julio. Fue recibido por una gran congregación de figuras políticas, entre ellas Atta Noor, antiguo Gobernador de la provincia de Balj, y Mohammad Mohaqeq, Segundo Jefe Ejecutivo. Ante esta congregación el Sr. Dostum anunció su intención de colaborar con el Gobierno en aras de la paz y las elecciones. Tras el regreso del Sr. Dostum, las protestas se calmaron de inmediato en el norte, lo cual permitió volver a abrir las fronteras, las carreteras y las oficinas gubernamentales en seis provincias. No hubo novedades en

las acciones judiciales emprendidas contra el Sr. Dostum, que siguió acusado de agredir sexualmente a un rival político en 2016.

7. Tras meses de negociaciones entre grupos de la oposición, el 26 de julio se inauguró en Kabul la Gran Coalición Nacional del Afganistán. La nueva Coalición agrupaba a miembros de la antigua Coalición para la Salvación del Afganistán, también conocida con el nombre de Alianza de Ankara, entre ellos los Sres. Dostum, Noor y Mohaqeq y representantes de otros partidos políticos y opositores del Gobierno hasta entonces no alineados. Ello supuso una nueva ampliación de la base original de la Alianza de Ankara, concebida en un principio como agrupación de ámbito en gran medida septentrional, no pastún y antes yihadista. El ex Presidente Hamid Karzai hizo suyos los objetivos de la Coalición, aunque no se incorporó formalmente a ella.

8. Una coalición aparte, pero en parte coincidente, integrada por 27 partidos políticos y establecida en marzo siguió exigiendo cambios en el sistema electoral y poniendo en duda la independencia de la Comisión Electoral Independiente. Al término del proceso de inscripción electoral el grupo exigió que se invalidará la lista electoral y que se procediera a una inscripción electoral biométrica. Sin embargo, la Comisión respondió que era imposible atender esas exigencias antes de las elecciones de octubre. No resultó concluyente una serie de debates organizada a fines de julio y principios de agosto por el Vicepresidente segundo, Sarwar Danesh, con la Comisión y el grupo. A medida que fracasaban las negociaciones, los partidos amenazaron con boicotear u obstruir la celebración de las elecciones si no se atendían sus exigencias. Algunos miembros se sumaron al ex Presidente Karzai en el llamamiento al establecimiento de una administración provisional.

9. El nombramiento el 19 de julio del Oficial Electoral Jefe de la Comisión Electoral Independiente facilitó los preparativos de las elecciones parlamentarias programadas para el 20 de octubre, pues ese puesto crucial llevaba vacante desde fines de 2017. La inscripción electoral, que había comenzado el 14 de abril en centros provinciales, se amplió posteriormente a los distritos y las zonas rurales y finalizó el 27 de julio. La Comisión anunció que se habían inscrito unos 9,5 millones de votantes, de los cuales el 34% eran mujeres. Terminada la inscripción, la Comisión empezó a digitalizar los registros para crear una lista de electores única que pudiera consultarse con fines de comprobación de duplicaciones y desglosarse por mesa de votación. Los partidos de la oposición y muchas figuras políticas han puesto en duda la credibilidad del número de votantes inscritos aduciendo las malas condiciones de seguridad y casos de fraude.

10. Las protestas motivadas por anteriores privaciones de derechos y posibles privaciones futuras como consecuencia de la inseguridad imperante en la provincia de Ghazni impidieron los preparativos electorales, en tanto representantes de las comunidades pastún y tayika exigieron que se dividiera la provincia en distritos electorales de menor tamaño. Los manifestantes bloquearon la oficina provincial de la comisión electoral durante todo el período de inscripción, con lo cual impidieron la inscripción de votantes y la presentación de candidaturas. El 25 de junio la Comisión Electoral Independiente decidió dividir Ghazni en tres distritos electorales como posible solución al problema de la privación de derechos. Sin embargo, la decisión no consiguió apaciguar a los manifestantes y desencadenó en la comunidad hazara contraprotestas a raíz de las cuales permaneció cerrada la oficina provincial de la Comisión.

11. La inscripción de candidatos a las elecciones parlamentarias y a los consejos de distrito terminó el 12 y el 14 de junio, respectivamente, y el 2 de julio se publicó una lista preliminar de los candidatos parlamentarios de 33 provincias. Sin embargo, el número de candidatos a las elecciones a los consejos de distrito fue escaso, de modo

que en apenas 40 de los 387 distritos fue suficiente el número de candidatos para celebrar elecciones pluralistas. La falta de candidatos se debió principalmente a la inseguridad, a los rigurosos requisitos educativos (diploma de enseñanza secundaria) y a la falta de claridad con respecto a las funciones de los consejos de distrito. El 29 de julio la Comisión Electoral Independiente propuso que las elecciones a los consejos de distrito y las elecciones parlamentarias en la provincia de Ghazni se pospusieran conforme al artículo 104 de la Ley Electoral, que permite posponer las elecciones por motivos de inseguridad u otras condiciones que hacen imposible celebrar elecciones limpias. El caso se remitió a un comité especial integrado por el Consejo Nacional de Seguridad, los presidentes de las dos cámaras parlamentarias, el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente de la Comisión Independiente de Supervisión de la Aplicación de la Constitución para que adoptara una decisión definitiva al respecto.

12. El 27 de julio el Presidente nombró a 102 comisionados de las oficinas provinciales de la Comisión de Quejas Electorales a los tres meses del vencimiento del plazo establecido legalmente. Como consecuencia del retraso en el nombramiento de los comisionados, al 20 de agosto solo se habían resuelto 240 de las 680 quejas recibidas. Entretanto, según lo dispuesto en la Ley Electoral de 2016 se estableció una comisión de investigación de antecedentes integrada por representantes de la Comisión de Quejas Electorales, la Dirección Independiente de Gobernanza Local, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Seguridad para detectar y expulsar a los candidatos vinculados con grupos armados ilegales. El 4 de agosto la comisión de investigación de antecedentes informó a 25 candidatos de que se les había vetado la participación en las elecciones por su vinculación con grupos armados ilegales. Tras un período de examen de los candidatos cuya inhabilitación se había recomendado, la Comisión de Quejas Electorales anunció el 10 de agosto que en total se había inhabilitado a 35 candidatos. Cuando se anunció la lista final de candidatos, varios partidarios de los candidatos inhabilitados empezaron a organizar protestas en Kabul y por todo el país. A raíz de esas protestas se cerró el complejo de la sede de la Comisión Electoral Independiente en Kabul, y, al 21 de agosto, se habían cerrado nueve oficinas provinciales de la Comisión en Badajshan, Gardez, Kabul, Kunduz, Logar, Parwan, Puli-Khumri, Samangan y Takhar. Con el cierre de la sede de la Comisión se paralizaron efectivamente los procesos de incorporación de datos en la inscripción de votantes y de recuperación de libros de inscripción electoral de varias provincias, entre otros preparativos electorales. El 8 de agosto el Presidente Ghani emitió un decreto relativo a garantizar la imparcialidad de los funcionarios y las instituciones gubernamentales en las elecciones y la seguridad del proceso electoral.

13. La Comisión Electoral Independiente aprobó su política en materia de género para aumentar la participación de mujeres en las elecciones y acreditó a 17 organizaciones de la sociedad civil, 15 organizaciones de medios de comunicación y 20 partidos políticos con fines de vigilancia y observación de todas las partes del proceso electoral. De los 2.564 candidatos a la Cámara Baja, la *Wolesi Jirga*, 391 eran mujeres.

14. Para prestar apoyo a los preparativos de las elecciones de 2018, las Naciones Unidas y los órganos de gestión electoral firmaron el 25 de julio un documento revisado del Proyecto de Apoyo Electoral dentro del cual los donantes prometieron aportar apoyo financiero adicional por valor de 57 millones de dólares.

15. Se mantuvo el impulso en pro de un proceso de paz ante los talibanes, favorecido por la participación cada vez más activa de la sociedad civil y los líderes religiosos en llamamientos a la paz entre el Gobierno y los talibanes. Representantes del Movimiento Popular a Favor de la Paz, que comenzó como serie de sentadas en el sur del Afganistán, emprendieron una marcha que salió de Lashkar Gah (provincia de Helmand) y pasó por las provincias de Kandahar, Zabul, Ghazni y Wardak antes de

llegar a Kabul el 18 de junio. En Kabul el grupo organizó una serie de sentadas frente a las embajadas de los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Islámica del Irán y frente a un complejo de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) antes de reanudar la marcha en dirección a la provincia de Balj. Los líderes religiosos también desempeñaron un papel de carácter más público en la defensa del proceso de paz. El 4 de junio más de 3.000 eruditos religiosos congregados en Kabul dictaron una fetua por la que declaró ilegítima la insurgencia contra el Gobierno del Afganistán y exhortaron a los talibanes a que se sumaran a las negociaciones de paz. Poco después, los días 10 y 11 de julio, se reunieron en la Arabia Saudita líderes religiosos de más de 30 países que volvieron a expresar su apoyo a la paz en el Afganistán.

16. Llevadas por las tendencias a favor de la paz en la esfera cívica, las principales partes en conflicto dieron muestras de flexibilidad. El 7 de junio el Presidente Ghani anunció una cesación unilateral de las hostilidades con los talibanes de ocho días de duración a partir del 12 de junio coincidiendo con la festividad de Eid al-Fitr. A los dos días, los talibanes emitieron su propia declaración de alto el fuego de tres días de duración para el período de la festividad que iba del 15 al 17 de junio. En los tres días en que coincidieron ambos alto el fuego se observó un notable descenso del número de incidentes violentos, con la única excepción destacada de dos atentados suicidas perpetrados en Yalalabad los días 16 y 17 de junio y reivindicados por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Provincia de Jorasán (EIIL-PJ). Combatientes talibanes entraron en zonas de todo el país controladas por el Gobierno, y en muchas provincias se celebraron reuniones públicas sin precedentes entre funcionarios gubernamentales y dirigentes talibanes. El 16 de junio el Gobierno anunció que el alto el fuego se prorrogaría 10 días más al término de la festividad. Los talibanes rechazaron la prórroga de su alto el fuego y el 18 de junio reanudaron las acciones ofensivas. Mientras que los medios sociales acogieron con entusiasmo, en general, el alto el fuego, algunas figuras políticas y organizaciones de la sociedad civil criticaron al Gobierno por la prórroga unilateral de su alto el fuego. El 30 de junio el Presidente Ghani anunció el fin oficial del alto el fuego gubernamental y declaró que el Gobierno deseaba entablar lo antes posible un diálogo entre las partes afganas al término del cual daría comienzo una segunda fase en la que participarían países de la región, los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

17. Las semanas siguientes aparecieron en los medios de comunicación noticias de conversaciones directas entre los Estados Unidos y los talibanes. A pesar de esa información y de nuevas noticias de contactos oficiosos cada vez más frecuentes entre todas las partes, durante el período sobre el que se informa no se materializaron negociaciones directas de paz entre el Gobierno y los talibanes.

18. El 19 de agosto el Presidente Ghani anunció un segundo alto el fuego que iría desde la víspera de la festividad de Eid al-Adha, el 20 de agosto, hasta la festividad de Milad al-Nabi, el 19 de noviembre. Sin embargo, el alto el fuego estaba condicionado a que los talibanes anunciaran un alto el fuego semejante, pero estos no respondieron oficialmente. El anuncio del Gobierno fue recibido favorablemente por los miembros de la comunidad internacional, como, los Estados Unidos, el Pakistán y la OTAN, pero generó controversia en los medios sociales y desencadenó una pequeña manifestación en Kabul.

19. Fueron limitados los avances del Gobierno en la aplicación del acuerdo de paz que había concertado en septiembre de 2016 con Hizb-i Islami Gulbuddin. El 25 de julio representantes de este grupo se reunieron con representantes de la Misión Apoyo Decidido de la OTAN para examinar una lista de 59 presos cuya puesta en libertad proponía Hizb-i Islami Gulbuddin. Sin embargo, se rechazaron sucesivas solicitudes de puesta en libertad de estos presos, principalmente por ser insuficientes las garantías

de que, una vez en libertad, no volverían a sumarse a los insurgentes. El 28 de julio miembros de la secretaría ejecutiva conjunta para la aplicación del acuerdo se reunieron con representantes de la Dirección Nacional de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para estudiar la aplicación del acuerdo, en particular por lo que se refiere a futuras liberaciones de presos y asignaciones de tierras, así como a los posibles efectos de una reciente oleada de jubilaciones en el sector de la seguridad en el personal de seguridad afiliado a Hizb-i Islami Gulbuddin.

B. Seguridad

20. La situación de la seguridad permaneció inestable en el marco de un número elevado de incidentes, brevemente interrumpido por la reducción de la violencia durante el alto el fuego de Eid al-Fitr. Del 15 de mayo al 15 de agosto la UNAMA registró en total 5.800 incidentes relacionados con la seguridad, lo cual supuso una disminución del 10% con respecto al mismo período de 2017. La región meridional registró el mayor número de incidentes, seguida de la región oriental y la región sudoriental; las tres regiones suman el 67% de todos los incidentes. Aunque los enfrentamientos armados siguieron constituyendo el mayor número de incidentes relacionados con la seguridad (61% del total), el número de enfrentamientos armados disminuyó un 14% frente al registrado durante el mismo período de 2017. Por lo que se refiere a otras categorías de incidentes, los atentados suicidas aumentaron un 38% y los ataques aéreos lanzados por la Fuerza Aérea Afgana y por fuerzas militares internacionales aumentaron un 46% en comparación con el mismo período de 2017.

21. Persistió la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el norte. Se redujo el territorio controlado por el Gobierno en la provincia de Faryab en la medida en que los talibanes se apoderaron de tres centros administrativos de distrito e invadieron la base del Ejército Nacional Afgano en Ghormach durante una semana de agosto. Se registraron numerosos combates terrestres en las provincias de Balj, Faryab y Jowzjan, mientras que los incidentes surgidos a lo largo de la principal carretera de circunvalación afectaron negativamente al tráfico entre las capitales de las tres provincias. En total, la región septentrional registró en el primer semestre de 2018 un 17% más de incidentes relacionados con la seguridad que en el mismo período de 2017.

22. El nivel general de violencia disminuyó apreciablemente durante el alto el fuego de Eid al-Fitr, enmarcados por escaladas de los enfrentamientos armados en las semanas anteriores y posteriores. Durante la semana en que tuvo lugar la festividad la UNAMA registró en total 285 incidentes, cifra que representa el nivel de violencia más bajo registrado durante una semana desde la transición de la seguridad de 2014. Sin embargo, durante las semanas posteriores al alto el fuego volvieron a aumentar los enfrentamientos armados propiciados por los talibanes, pues el movimiento se propuso recuperar la ofensiva tras los acontecimientos sin precedentes ocurridos durante la festividad.

23. Durante el período sobre el que se informa no se produjeron cambios sostenidos en el reparto del control territorial entre el Gobierno y los talibanes. Los talibanes lanzaron varios ataques contra centros administrativos de distrito y se apoderaron temporalmente de Jaghatu y Deh Yak, en la provincia de Ghazni, Tala Wa Barfak y Burkah, en la provincia de Baghlan, y Atghar, en la provincia de Zabul, antes de retirarse ante los contraataques de las fuerzas nacionales de seguridad afganas, a menudo emprendidos con el apoyo de ataques aéreos militares internacionales. El 10 de agosto los talibanes lanzaron un ataque a gran escala contra la ciudad de Ghazni, capital de la provincia de Ghazni. Los combates duraron cinco días, hasta que las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas empujaron a los combatientes talibanes al extrarradio de la ciudad. Se recibieron otras noticias de ataques contra los

centros administrativos de distrito de Deh Yak, Khwajah Omari y Ajrestan, en la provincia de Ghazni, y de emboscadas tendidas por los talibanes a refuerzos que se dirigían a Ghazni a su paso por las provincias de Zabul, Wardak y Logar. En la carretera principal que une Kabul con Kandahar la inseguridad siguió siendo alta.

24. Siguió siendo destacada la presencia del EIIL-PJ en la región oriental, donde reivindicó ocho atentados suicidas y complejos perpetrados en la provincia de Nangarhar durante el período sobre el que se informa y dos atentados en Kabul y uno en la ciudad de Gardez. El EIIL-PJ siguió combatiendo contra los talibanes en el este, donde se informó de enfrentamientos armados en las provincias de Nangarhar y Kunar. Las fuerzas militares internacionales siguieron dirigiendo sus operaciones contra el EIIL-PJ en la provincia de Nangarhar en el marco de una serie de ataques aéreos lanzados contra objetivos del EIIL-PJ en los distritos de Deh Bala, Achin, Khugyani, Naziyan y Chaparhar, en la provincia de Nangarhar. El 1 de agosto un nutrido grupo de combatientes que se proclamaron afiliados al EIIL-PJ se rindieron al Gobierno en la provincia de Jowzjan tras una serie de encarnizados enfrentamientos contra fuerzas talibanes. El incidente permitió a los talibanes consolidar su posición como principal fuerza insurgente en Jowzjan y supuso un revés al intento del EIIL-PJ de afianzarse en el norte del país.

25. El Gobierno siguió esforzándose por aplicar la reforma del sector de la seguridad de conformidad con su hoja de ruta de cuatro años. De conformidad con la Ley Intrínseca de 2017, se ha jubilado a 656 generales del Ejército Nacional Afgano con el propósito de promover el cambio generacional, volver a equilibrar la distribución de los grados y fomentar un liderazgo más firme. Las reformas se ampliaron al Ministerio del Interior en el marco de la primera de las dos fases de jubilación previstas, que comenzaron en julio. La Policía Nacional Afgana también siguió adelante con la verificación de su personal, comenzada el 15 de abril. El proceso, que incluye el registro biométrico del personal de la Policía y la presentación de prueba de su verificación de antecedentes, seguía en marcha en agosto de 2018.

26. Los países que contribuyen a la Misión Apoyo Decidido de la OTAN se reunieron en Bruselas los días 11 y 12 de julio. Reafirmando su compromiso con la seguridad duradera en el Afganistán, los aliados y asociados de la OTAN anunciaron su voluntad de mantener la misión, que no es de combate, hasta que las condiciones indicaran la idoneidad de incorporar cambios en ella. También acordaron prorrogar hasta 2024 el apoyo financiero a las fuerzas afganas. La OTAN puso de relieve la estabilidad del Afganistán en el contexto de la región de Asia Central y el papel de los agentes regionales en el logro de la paz y la estabilidad del Afganistán mediante el pleno apoyo a una solución política negociada.

27. Se informó de 12 incidentes en total que habían afectado a personal de las Naciones Unidas, entre ellos cinco casos de intimidación, un asesinato y un incidente relacionado con un artefacto explosivo improvisado. El 31 de julio se dio muerte a un contratista que prestaba servicios a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el curso de un atentado complejo dirigido contra instalaciones gubernamentales en la ciudad de Yalalabad.

C. Cooperación regional

28. Durante el período sobre el que se informa prosiguió el impulso orientado a la adopción de un enfoque regional consolidado en materia de paz en el Afganistán, que había sido generado por la segunda reunión del Proceso de Kabul de Cooperación para la Paz y la Seguridad, celebrada el 28 de febrero, y por la conferencia celebrada en Taskent los días 26 y 27 de marzo. El 17 de julio una delegación de Qatar visitó Uzbekistán, donde representantes de los dos países examinaron la aplicación de las

disposiciones de la Declaración de Taskent sobre Principios Fundamentales para un Arreglo Pacífico del Conflicto en el Afganistán. Uzbekistán reiteró su oferta de acoger conversaciones directas entre el Gobierno del Afganistán y los talibanes. El 23 de julio Qatar acogió una reunión cuadrilateral de asesores de seguridad nacionales del Afganistán, la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos para examinar el proceso de paz en el Afganistán, la lucha contra la financiación del terrorismo y otros aspectos de la cooperación regional. Del 7 al 10 de agosto, una delegación de la Comisión Política de los talibanes con sede en Qatar visitó Uzbekistán, donde se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán, Abdulaziz Kamilov.

29. Se avanzó en la aplicación del Plan de Acción del Afganistán y el Pakistán para la Paz y la Solidaridad, que había quedado ultimado en mayo de 2018. Reunidos el 11 de junio en el Pakistán, directores generales de operaciones militares del Afganistán y el Pakistán convinieron en emplazar mutuamente oficiales de enlace en la capital del otro país y establecer centros de coordinación para intercambiar información. Prosiguieron las visitas de alto nivel entre las instituciones de seguridad de ambos países con el objeto de aumentar la cooperación en torno a la paz en el Afganistán y tratar de cuestiones de seguridad bilaterales. El Secretario de Relaciones Exteriores del Pakistán visitó Kabul el 22 de julio. Tras salir elegido Primer Ministro del Pakistán, Imran Khan pronunció en público como Primer Ministro electo un discurso en el que indicó que el Pakistán daría prioridad a la paz en el Afganistán. Los bombardeos de artillería transfronterizos siguen siendo fuente de preocupación de ámbito bilateral.

30. Prosiguieron las iniciativas multilaterales dirigidas a mejorar la cooperación regional. Durante la 18ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Qingdao (China) los días 9 y 10 de junio, se subrayó la importancia del grupo de contacto de la Organización con el Afganistán. Los participantes reiteraron la necesidad de un desarrollo socioeconómico basado en las prioridades del pueblo afgano y de un mayor grado de conectividad e integración regional a favor del Afganistán. En el comunicado de prensa de la Cumbre los miembros de la Organización se mostraron a favor de la mediación en el conflicto en el Afganistán y de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo. El 2 de julio el Afganistán acogió una reunión para embajadores del Proceso de Estambul Corazón de Asia. Los países participantes evaluaron los avances realizados en el cumplimiento de las recomendaciones acordadas el 19 de abril en la reunión de altos funcionarios, en particular la ampliación de la cooperación económica y el fortalecimiento de las medidas de fomento de la confianza.

III. Derechos humanos

31. El 15 de julio, la UNAMA publicó su informe de actualización de mitad de año para 2018 sobre la protección de los civiles en el conflicto armado[1]. La Misión documentó 5.122 bajas civiles (1.692 muertos y 3.430 heridos) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, cifra que representa el mayor número de muertes de civiles registrado en un solo semestre desde que la UNAMA inauguró la documentación sistemática en 2009. El nivel general de daños civiles fue semejante al del mismo período de 2017. La UNAMA atribuyó el 67% del total de las bajas civiles a elementos antigubernamentales (un 42% a los talibanes, un 18% al EIIL-PJ y un 7% a elementos antigubernamentales no identificados, con inclusión del autoproclamado EIIL-PJ), el 20% a las fuerzas progubernamentales, el 10% al fuego cruzado de

[1] UNAMA, “Midyear update on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 June 2018” (Kabul, 2018).

procedencia incierta durante los enfrentamientos terrestres entre elementos antigubernamentales y las fuerzas progubernamentales y el 3% a otros incidentes, incluidos restos explosivos de guerra y bombardeos de artillería transfronterizos.

32. El uso de tácticas con artefactos explosivos improvisados (incluidos ataques suicidas y de otra índole) causó 2.290 víctimas civiles (659 muertos y 1.631 heridos) y fue durante el primer semestre de 2018 la principal causa de esas bajas, al constituir el 45% de las víctimas civiles. Correspondieron a los combates terrestres, segunda causa en importancia, 1.494 víctimas civiles (360 muertos y 1.134 heridos), lo cual representa un 29% del total de las bajas civiles. La UNAMA siguió documentando un alto grado de bajas civiles debidas a ataques aéreos lanzados por fuerzas progubernamentales: 353 (149 muertos y 204 heridos); más de la mitad de esa cifra corresponde a mujeres y niños. La UNAMA documentó 1.355 bajas entre niños (363 muertes y 992 lesiones), lo que representa un 24% de todas las bajas civiles. El número de bajas entre mujeres disminuyó un 15% con la muerte de 157 de ellas y lesiones sufridas por 387. Más de la mitad de las bajas entre mujeres se debió a combates terrestres.

33. A raíz de ataques lanzados contra emplazamientos relacionados con las elecciones se registraron de abril a junio 341 bajas civiles (117 muertos y 224 heridos), en su mayor parte (más de 250 bajas) como consecuencia de dos ataques lanzados en la ciudad de Kabul, el 22 de abril, y en la provincia de Khost, el 6 de mayo. La UNAMA documentó ataques contra centros de distribución de *tazkiras* (tarjetas de identidad nacionales) y puestos de inscripción electoral, así como ataques contra personal relacionado con las elecciones. También registró amenazas, secuestros y asesinatos de candidatos y sus partidarios.

34. Del 1 de abril al 30 de junio el equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país verificó 79 ataques dirigidos contra escuelas y personal del ámbito docente, en particular 44 incidentes relacionados con las elecciones que afectaron a escuelas, 24 ataques directos contra escuelas, siete amenazas dirigidas contra escuelas y personal conexo y cuatro ataques lanzados contra personal del ámbito docente. El equipo de tareas atribuyó 73 incidentes a elementos antigubernamentales (47 a los talibanes, 18 al EIIL-PJ, entre ellos 1 al EIIL-PJ autoproclamado, y 7 a elementos antigubernamentales no determinados), 4 a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas y 2 conjuntamente a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas y los talibanes en episodios de fuego cruzado. El acusado aumento de los ataques contra escuelas y personal del ámbito docente frente a los 11 incidentes de ese tipo registrados en el anterior período sobre el que se informa se debe a que se emplearon escuelas como centros de inscripción electoral y a que elementos antigubernamentales dirigieron ataques contra instalaciones de enseñanza, al parecer en respuesta a operaciones militares emprendidas por fuerzas progubernamentales. Además, el equipo de tareas verificó la utilización por el Ejército Nacional Afgano de una escuela con fines militares.

35. El equipo de tareas verificó 12 ataques dirigidos contra establecimientos de salud y personal sanitario, 9 de ellos contra establecimientos de salud y 3 contra personal sanitario, frente a los 16 incidentes correspondientes al anterior período sobre el que se informa. El equipo de tareas atribuyó 7 incidentes a grupos armados (4 a los talibanes, 2 a elementos antigubernamentales no determinados y 1 al autoproclamado EIIL-PJ), 2 conjuntamente a fuerzas militares internacionales y las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, 1 a una milicia progubernamental, 1 a la Policía Nacional Afgana y 1 conjuntamente al Ejército Nacional Afgano y los talibanes en episodios de fuego cruzado. El equipo de tareas verificó el reclutamiento y la utilización de dos niños varones por partes en conflicto y documentó denuncias plausibles de reclutamiento y utilización de cuatro niños varones por parte de los talibanes y de un niño varón por parte de la Dirección

Nacional de Seguridad y los talibanes. Además, el equipo de tareas documentó denuncias plausibles de tres casos de abusos sexuales sufridos por tres niños varones, en particular con fines de *bacha bazi*, que se atribuyeron a la Policía Nacional Afgana y a la Policía Local Afgana.

36. A últimos de mayo la UNAMA presentó al Gobierno y a determinados interesados un informe confidencial en el que se documentaba el grado de conocimiento y las observaciones de las comunidades afganas con respecto al reclutamiento y la utilización de niños por las partes en conflicto, así como en relación con las causas últimas de ese tipo de prácticas en el Afganistán y los factores que les eran propicios. El informe se basaba en casi 700 entrevistas, así como en la vigilancia ejercida por equipos de derechos humanos de la UNAMA entre el 15 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. El informe ponía de manifiesto el hecho de que la práctica de reclutar y utilizar niños se ve como algo habitual en el Afganistán, y que se considera a los talibanes los principales responsables de ello. Comunidades de todas las regiones del Afganistán denunciaron además la utilización de niños con fines de abuso sexual, en particular de *bacha bazi*, por parte de las fuerzas armadas, en particular por parte de la Policía Local Afgana y la Policía Nacional Afgana, y mencionaron la pobreza y el desempleo como causas subyacentes.

37. Tras la tipificación como delito del *bacha bazi* en el nuevo Código Penal, la UNAMA acogió el 6 de agosto un acto orientado a elaborar estrategias para la rendición de cuentas con respecto a ese delito y a fortalecer las medidas favorables a las víctimas. Participaron en el acto representantes del Gobierno, de las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas y de fuerzas militares internacionales. Aunque no hubo unanimidad entre los participantes en cuanto al alcance del problema y la manera de hacerle frente, todos reconocieron que era preciso sensibilizar y concienciar a la población afgana y a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas con respecto a la tipificación del *bacha bazi* como delito. Entre las sugerencias con fines de seguimiento se mencionó la adopción de una estrategia y plan de acción para examinar la cuestión de forma más exhaustiva.

38. El Gobierno, con ayuda de la UNAMA, siguió tratando de hacer frente a la violencia contra las mujeres. El 29 de mayo la Misión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicaron un informe[2] en el que se ponían de relieve las preocupaciones en materia de derechos humanos derivadas de la utilización de la mediación en los casos de violencia contra las mujeres. En junio el Gobierno estableció la Alta Comisión para la Eliminación del Acoso contra las Mujeres y los Niños a fin de mejorar la aplicación de la Ley de 2017 de Lucha contra el Acoso de Mujeres y Niños . El Gobierno también adoptó medidas para ampliar el papel de las mujeres en la promoción de la paz y la seguridad. El 17 de julio la UNAMA facilitó una conferencia nacional dirigida a forjar un consenso en torno a la adopción de medidas para asegurar la rendición de cuentas en relación con los actos de violencia contra las mujeres. El 29 de julio el Presidente presentó la candidatura de una magistrada al Consejo Superior del Tribunal Supremo del Afganistán. De ser nombrada, será la primera mujer en ocupar ese cargo. El 31 de julio el Gobierno presentó su segundo informe sobre la situación de la aplicación del Plan de Acción Nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, en el que observó que, en general, se había contratado un mayor número de mujeres en el sector de la seguridad. Sin embargo, también se indicaban algunas tendencias negativas, como la disminución del número de mujeres con grado de

[2] UNAMA y ACNUDH, “Injustice and Impunity: Mediation of Criminal Offences of Violence against Women” (mayo de 2018), disponible en www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_OHCHR_EVAW_Report2018_InjusticeImpunity29May2018.pdf.

oficial en el Ejército Nacional Afgano y el menor número de mujeres integrantes del Consejo Superior de la Paz.

39. El 26 de junio el Gobierno presentó su informe de seguimiento para un período de un año sobre las medidas adoptadas con respecto a tres recomendaciones concretas formuladas por el Comité contra la Tortura en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Afganistán. La Asamblea Nacional examinó y aprobó la Ley de Prohibición de la Tortura, que está pendiente de aprobación final por el Presidente.

40. El 30 de junio había finalizado el mandato de los comisionados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán. El 9 de julio el Presidente modificó un decreto presidencial anterior, del 26 de mayo de 2018, en el que se establecía el procedimiento de búsqueda y selección de los nuevos comisionados a efectos de implantar un sistema de verificación de antecedentes en dos niveles para garantizar la diversidad entre la selección final de 27 candidatos. Las Naciones Unidas ya no observan el proceso conforme al decreto revisado, y el nombramiento de los nueve comisionados sigue siendo prerrogativa exclusiva del Presidente. Las vacantes a los nuevos cargos de comisionado se publicaron el 15 de agosto y su cierre estaba previsto para el 3 de septiembre. Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo objeto de intimidación y acoso por parte de elementos antigubernamentales y fuerzas progubernamentales. La UNAMA documentó cuatro incidentes de acoso e intimidación en las provincias de Ghazni, Helmand y Kandahar.

IV. Coordinación de la asistencia para el desarrollo

41. El Gobierno avanzó en cierta medida en el cumplimiento de sus compromisos de reforma. El 2 de junio la Dirección Independiente de Gobernanza Local ultimó su plan de aplicación de la política en materia de gobernanza subnacional centrada en los ciudadanos, que el Alto Consejo para el Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción había aprobado el 14 de mayo. En el plan figuran aclaraciones esenciales sobre el papel de las autoridades centrales y provinciales, así como detalles relativos a las nuevas reformas de la planificación, la financiación y la gestión de los recursos naturales a escala subnacional. El Gobierno también avanzó en cierta medida en la mejora de la capacidad de la administración pública de ámbito provincial. El 25 de julio la Comisión Independiente de Reforma Administrativa y Función Pública informó de que había concluido el proceso de contratación en masa en las provincias para puestos de funcionario público, en particular de maestros, que había comenzado en enero de 2018. Como consecuencia de ello se contrató a 11.176 funcionarios para que ocuparan puestos vacantes en 33 provincias. Gracias a esas reformas han empezado a acortarse las diferencias arraigadas entre las dependencias de gobernanza centrales y las subnacionales, situación que ha socavado la legitimidad del Gobierno a escala local.

42. El Gobierno también siguió esforzándose por mejorar el marco institucional por el que se rigen sus iniciativas de lucha contra la corrupción. El 4 de junio el Presidente nombró a un nuevo Fiscal General Adjunto para la Lucha contra la Corrupción. Se terminó el proyecto de ley contra la corrupción, que se envió a la Oficina del Vicepresidente segundo para que lo examinara. Desde mi informe anterior, el Centro de Justicia contra la Corrupción ha juzgado otros cuatro casos, con lo que el total de casos juzgados por el Centro desde su establecimiento en 2016 asciende a 38 casos contra 152 acusados. A raíz de los 24 casos finalizados se ha condenado y encarcelado a 71 personas conforme a una decisión definitiva del Tribunal Supremo. Sin embargo, los asociados internacionales han expresado preocupación por el descenso del

desempeño del Centro, en particular por el estancamiento de casos no resueltos, el escaso número de casos juzgados por el Centro y la frecuente falta de ejecución de las órdenes de detención por parte del Ministerio del Interior, a raíz de lo cual un alto número de casos sigue juzgándose en rebeldía, sin que los condenados sufran consecuencias.

43. El 30 de junio la UNAMA puso fin a un estudio de tres meses sobre la aplicación del nuevo Código Penal, entrado en vigor el 14 de febrero de 2018. El informe del estudio se trasladará a la comunidad internacional, así como a institutos de capacitación del Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, para detectar deficiencias y reajustar un programa de capacitación en el Código que se está impartiendo. Con apoyo de la UNAMA se facilitaron a los tribunales y fiscalías regionales 1.219 ejemplares más del nuevo Código Penal. El Ministerio de Justicia imprimió 484 ejemplares más que se entregaron a 22 de las 34 provincias.

44. El Gobierno siguió dando prioridad a la reforma del sector privado con el objeto de estimular el crecimiento económico y reequilibrar los sectores privado y público. Sin embargo, el crecimiento siguió siendo bajo, lo cual puso en peligro la gradual recuperación económica del país con respecto a la conmoción causada por la gran reducción de la presencia internacional en el marco de la transición de la seguridad de 2014. En el Afghanistan Development Update, publicación bianual aparecida el 7 de agosto, el Banco Mundial proyectó en 2018 un crecimiento del producto interno bruto en cifras reales del 2,4%, proporción inferior al 2,7% de 2017, en relación con lo cual se mencionaron los problemas en materia de seguridad, la sequía actual, la pérdida de confianza de las empresas y la inestabilidad política como principales frenos al crecimiento. Además, el Banco Mundial expresó preocupación por que, conforme a las actuales proyecciones, el crecimiento económico no podrá atender la demanda de empleo. Según cifras de la evaluación nacional del riesgo y la vulnerabilidad y de la Organización Internacional del Trabajo, el 25% de la fuerza de trabajo del país carece de empleo remunerado. Además, según las proyecciones está previsto que todos los años hasta 2025 accedan al mercado laboral entre 480.000 y 600.000 personas nuevas, de las cuales se estima que serán jóvenes una media de 400.000. En vista de que cerca del 63,7% de los afganos tiene menos de 25 años, el aumento de la población joven posterior a 2001 exige esfuerzos más denodados por aprovechar el dividendo demográfico de ese grupo de edad y, con ello, aliviar la presión a la que está sometido el mercado de trabajo.

45. El 18 de julio se reunió en Kabul la Junta Mixta de Coordinación y Vigilancia. Las deliberaciones se centraron en seis resultados esenciales acordados con el Gobierno con anterioridad a la Conferencia Ministerial sobre el Afganistán, que se celebrará el 28 de noviembre en Ginebra. Se trata de : a) la celebración de elecciones parlamentarias y a los consejos de distrito que sean libres, justas y creíbles; b) la ultimación de todos los programas nacionales prioritarios de modo que contemplen la cuestión transversal del empoderamiento de las mujeres y la prestación de servicios básicos, en particular en materia de educación y salud; c) el cumplimiento de los parámetros de referencia del Fondo Monetario Internacional; d) la creación de un entorno propicio al crecimiento impulsado por el sector privado, en particular promulgando la Ley de Minería y una nueva Ley de Asignación de Tierras; e) avances claros en la lucha contra la corrupción, como la ejecución de todas las órdenes pendientes dictadas contra funcionarios públicos acusados de corrupción; y f) avances en la reforma del sector de la seguridad. El Ministerio de Hacienda estableció un grupo especial de tareas para supervisar los resultados.

46. El 12 de agosto el Gobierno y la UNAMA pusieron en marcha oficialmente los preparativos de la Conferencia Ministerial de Ginebra. En el acto, que estará dedicado al desarrollo, el crecimiento, la reducción de la pobreza y las reformas, se presentará

el Marco de Rendición Mutua de Cuentas de Ginebra, nuevo conjunto de parámetros en materia de rendición de cuentas.

V. La asistencia humanitaria y quienes regresan al país

47. En 2018, 178.002 personas más se vieron desplazadas por el conflicto por primera vez. Del 15 de mayo al 15 de agosto se vieron desplazadas 31.825 personas. Aunque el desplazamiento vinculado con el conflicto es inferior en más de un tercio al registrado en el mismo período de 2017, muchas familias desplazadas se han visto obligadas a desplazarse en múltiples ocasiones y no tienen perspectivas inmediatas de regresar a sus lugares de origen en condiciones de seguridad y dignidad. En el período a que se refiere el informe, los asociados humanitarios proporcionaron alimentos y otro tipo de asistencia para subsistir a 157.684 personas desplazadas por el conflicto.

48. La demanda de atención traumatológica para las víctimas de la guerra ascendió a 24.687 casos en 2018, lo cual supone un aumento del 14% frente a 2017. Las necesidades son especialmente altas en las provincias de Helmand, Kunar, Kunduz y Takhar, donde los enfrentamientos han pasado rigurosa factura y el acceso ha quedado reducido. En el período a que se refiere el informe, los 15 integrantes del grupo de acción sanitaria atendieron a 584.934 personas, el 61% de las cuales eran mujeres y niñas.

49. Los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados activados por las víctimas siguen siendo en el Afganistán destacadas causas de bajas civiles, que ascendieron a 553 durante el primer semestre de 2018. Actualmente el 89% del total de víctimas son niños. Ante ello, las Naciones Unidas y sus asociados han preparado material adaptado a los niños sobre los restos explosivos de guerra que en un principio se utilizará en 12 aldeas, así como tres espacios adaptados a los niños. De enero a junio de 2018 los asociados en la lucha antiminas eliminaron o destruyeron en campos de batalla y comunidades de todo el país 6.878 restos explosivos de guerra, a pesar de lo cual el carácter permanente del conflicto sigue aumentando notablemente los niveles de contaminación y de peligro.

50. En el período sobre el que se informa se confirmaron 3 casos de poliomielitis, con lo cual el número total de casos ascendió a 11 en 2018. Los últimos casos de transmisión se notificaron en dos distritos (Nad-e-Ali, en la provincia de Helmand, y Tsowkey, en la provincia de Kunar). En total, en 2018 se han visto afectadas cuatro provincias (Helmand, Kandahar, Kunar y Nangarhary). En julio, durante la temporada en que la transmisión es alta, se vacunó a 6.003.849 niños menores de 5 años de zonas de alto riesgo en el marco de la primera campaña de vacunación contra la poliomielitis.

51. Al 4 de agosto la sequía había afectado a 229 de los 401 distritos de todo el país. Más de 100.000 personas se han visto obligadas desde principios de mayo a desplazarse de zonas rurales a centros urbanos de las provincias de Badghis, Ghor y Herat. La mayoría de los recién desplazados vive en asentamientos informales donde dispone de pocos servicios sociales básicos, cuando no de ninguno. Las comunidades rurales han agotado sus activos vendiendo ganado para comprar alimentos y consumiendo las semillas de la siguiente temporada de siembra. Está programada una evaluación de emergencia de ámbito nacional para examinar la situación crónica de la seguridad alimentaria, que previsiblemente empeorará a medida que en gran parte del país comience en septiembre el período de escasez. Se estima que 1,4 millones de personas necesitarán asistencia vital de emergencia en los próximos meses.

52. Las familias que tuvieron que desplazarse a centros urbanos a causa de la sequía recibieron de las Naciones Unidas y sus asociados la misma asistencia de emergencia que recibieron quienes se vieron desplazados por el conflicto. También se

suministraron alimentos a familias de zonas rurales para prevenir nuevos desplazamientos relacionados con la sequía. Estaba previsto que de julio a septiembre de 2018 las Naciones Unidas y sus asociados suministraran asistencia alimentaria a 441.000 personas de las provincias de Badghis, Faryab, Ghor, Herat y Jowzjan, que eran las más afectadas. A partir de fines de septiembre de 2018 las Naciones Unidas y sus asociados prorrogarán al menos durante seis meses el apoyo prestado al total de personas necesitadas como consecuencia de la sequía en 20 provincias, estimado en 1,4 millones.

53. Para atender esa demanda de emergencia, el Gobierno ha movilizado 60.000 toneladas de trigo en grano procedentes de sus propias reservas estratégicas de cereales, mientras que las Naciones Unidas están adquiriendo productos básicos complementarios en los mercados internacionales. Sobre la base de las estimaciones de las Naciones Unidas, medio millón de personas necesitan de forma acuciante ayuda agrícola y ganadera para la subsistencia en forma de distribuciones de semillas, fertilizantes y forraje. Como complemento de la respuesta humanitaria, los agentes que se dedican al desarrollo están movilizando recursos y operaciones en el marco de proyectos ejecutados en seis provincias en relación con la adaptación al cambio climático, las cadenas de valor agrícolas y el desarrollo rural a fin de poder prestar asimismo apoyo a la recuperación de las comunidades y la resiliencia a la sequía a largo plazo. Las Naciones Unidas también tienen previsto llevar a cabo actividades de limpieza en la provincia de Farah para ampliar la superficie de tierra disponible y aliviar la carga que impone el desplazamiento provocado por la sequía a las comunidades de acogida y a los recursos esenciales. Las actividades de remoción llevadas a cabo en Kandahar han permitido construir nuevas zonas residenciales, lo cual favorece el acceso a las tierras de quienes regresan del Pakistán.

54. Un total de 210.724 ciudadanos afganos (entre ellos personas que regresaban espontáneamente, deportados y refugiados) volvieron al Afganistán en el período a que se refiere el informe. Según la OIM, del 14 de mayo al 18 de agosto de 2018, 7.433 personas no documentadas regresaron del Pakistán y 198.954 de la República Islámica del Irán. En el mismo período la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ayudó a que regresaran 3.859 refugiados del Pakistán, 446 de la República Islámica del Irán y 32 de otros países. El número de refugiados registrados que regresaban al Afganistán es notablemente inferior a la cifra de 43.208 personas que habían regresado en ese mismo período de 2017. El número de personas no documentadas que regresan de la República Islámica del Irán se ha disparado, situándose en 2018 en más de 480.000 deportados o personas que regresaron frente a los 215.000 de 2017, algo que parece obedecer al empeoramiento de la situación económica en ese país. Los organismos humanitarios procuran llegar a las personas necesitadas que regresan y proporcionarles un conjunto formado por alimentos, efectivo y otros productos de necesidad básica a fin de facilitar su reintegración.

55. Prosiguen las limitaciones al acceso humanitario, y entre el 15 de mayo y el 15 de agosto se registraron 130 incidentes que afectaron a las Naciones Unidas y sus asociados humanitarios. Desde principios de año se ha registrado un total de 253 incidentes, entre ellos el asesinato de 23 trabajadores humanitarios, las heridas sufridas por 37, el secuestro de 74 y la detención de 38. Ha proseguido la tendencia a lanzar ataques deliberados más violentos contra establecimientos de salud y personal sanitario. Durante el período sobre el que se informa el equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en relación con el acceso humanitario notificó nueve incidentes en que se denegó el acceso (entre ellos, siete por parte de los talibanes, uno por parte del EIIL-PJ y uno por parte de una milicia progubernamental), frente a los 18 incidentes de ese tipo correspondientes al anterior trimestre. Los agentes de remoción de minas cada vez corren mayor peligro de secuestro y violencia

armada. Durante el período examinado en el informe tuvieron lugar dos incidentes destacados, entre ellos el primer secuestro prolongado llevado a cabo por el EIIL-PJ. El acceso humanitario en zonas en disputa o controladas por elementos antigubernamentales siguió constituyendo un problema persistente.

56. En mayo se revisó el Plan de Respuesta Humanitaria para 2018 a fin de agregar otros 117 millones de dólares destinados a prestar asistencia a 1,4 millones de personas afectadas por la sequía. Globalmente el Plan revisado hace un llamamiento para recabar casi 547 millones de dólares con los que se pretende prestar asistencia en 2018 a 4,2 millones de personas. Al 20 de agosto, las actividades de asistencia humanitaria en el Afganistán habían recibido financiación por un monto de 231,1 millones de dólares, de los cuales 175,8 millones se destinaron a actividades incluidas en el Plan.

VI. Lucha contra los estupefacientes

57. Durante el período sobre el que se informa el Gobierno empezó a preparar una nueva estrategia nacional sobre drogas para hacer frente al reciente aumento del cultivo y la producción de opio. A escala regional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y sus asociados en el marco de las medidas estratégicas para responder a las amenazas mundiales de los opiáceos respaldan la nueva estrategia. Las medidas estratégicas, que van dirigidas a combatir las amenazas conexas de la delincuencia, el terrorismo y la corrupción, parten de una metodología más eficaz basada en el Enfoque Concertado Único de la UNODC para la Interconexión de Europa con Asia Occidental y Central .

58. El Gobierno, con el apoyo de sus asociados internacionales, prosiguió sus operaciones de lucha contra los estupefacientes. Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, las fuerzas del orden afganas llevaron a cabo en total 1.804 operaciones de esa índole que dieron lugar a la incautación de 1.548 kg de heroína, 6.767 kg de morfina, 12.030 kg de opio, 61 kg de metanfetamina, 15.426 kg de hachís, 10.716 pastillas de 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), 15.537 kilogramos de precursores químicos sólidos y 7.774 litros de precursores químicos líquidos. Se desmantelaron en total 22 laboratorios de fabricación de heroína. Se detuvo a 2.039 sospechosos y se incautaron 311 vehículos, 134 armas y 598 teléfonos móviles. En el curso de las operaciones fueron muertos tres agentes de la Policía de Lucha contra la Droga del Afganistán.

VII. Apoyo a la Misión

59. Las tasas de vacantes de la Misión al 31 de julio eran del 10% para el personal de contratación internacional, 11% para el personal nacional del Cuadro Orgánico y 3% para el personal de contratación local, en tanto las tasas aprobadas son del 11,1%, el 8,5% y el 3%, respectivamente. La proporción de mujeres en la plantilla siguió siendo muy baja. Al 31 de julio, el porcentaje de mujeres por categoría de personal era el siguiente: 34% (contratación internacional), 38% (Voluntarios de las Naciones Unidas), 12% (personal nacional del Cuadro Orgánico) y 7% (personal de contratación local). Entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2018, la UNAMA llevó a cabo 160 misiones por carretera y 23 misiones aéreas, así como 970 misiones de divulgación inversa en las que representantes de distrito visitaron oficinas de la UNAMA sobre el terreno.

VIII. Observaciones

60. El Afganistán ya casi ha entrado en el quinto año de su Decenio de la Transformación (2015-2024), iniciado con la retirada de las fuerzas internacionales en 2014. Casi cumplido el ecuador, las dificultades políticas, económicas y de seguridad que acechan al país siguen siendo numerosas y complejas. Aparte de las bajas tasas de crecimiento económico, del alto grado de desempleo y del aumento del desplazamiento de personas a raíz del conflicto, una serie de problemas más inmediatos, como la actual sequía, han llevado al límite a las comunidades vulnerables. El conflicto sigue cobrándose víctimas sin piedad entre la población civil, cuya lucha cotidiana en medio de la inseguridad se ve agravada por la inhumanidad de los atentados terroristas. Ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales, urge que los dirigentes políticos den muestras de unidad de propósito y guíen al Afganistán hacia una mayor estabilidad y autosuficiencia.

61. El alto el fuego declarado durante Eid al-Fitr puso vivamente de manifiesto el deseo generalizado de paz de los afganos. El alto el fuego, el primero desde 2011, fue acogido con celebraciones tanto por los civiles afganos como por las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas y los combatientes talibanes, lo cual es prueba de que los afganos de diversos grupos religiosos, tribales y de la sociedad civil desean fervientemente la paz. Su importancia no se ve mermada ni por su brevedad ni por los atentados posteriores, que han puesto a prueba los esfuerzos por lograr una solución pacífica. Las Naciones Unidas ponen de relieve la necesidad de llegar a una solución pacífica del conflicto en el Afganistán e invita a todos a esforzarse por alcanzar ese objetivo de máxima urgencia.

62. Lamento que los talibanes no aceptaran el llamamiento realizado por el Presidente en su declaración pronunciada con ocasión de Eid al-Adha a efectos de entablar negociaciones directas para poner fin al conflicto y que no se sumaran al alto el fuego propuesto por el Gobierno. Aliento a los Estados Miembros a que cooperen en pro del logro de la paz y la estabilidad en el Afganistán en aras de unas conversaciones directas entre el Gobierno del Afganistán y los talibanes. Las Naciones Unidas siguen trabajando con todas las partes y están dispuestas a prestar todo el apoyo necesario.

63. Me preocupa en sumo grado el empeoramiento de los efectos del conflicto en la población civil. En el primer semestre de 2018 el conflicto se cobró 1.692 muertes de civiles, cifra que representa el mayor número de muertes de este tipo registrado en un solo semestre desde que la UNAMA inauguró en 2009 su documentación sistemática. El hecho de dirigir los ataques contra infraestructura civil, desde escuelas y hospitales a oficinas de medios de comunicación, pone de relieve la violencia a la que está sometido el tejido de la sociedad afgana. Insto a todas las partes a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional a fin de evitar los ataques contra la población civil y la infraestructura civil.

64. La inseguridad, la violencia, la pobreza y el desempleo siguen afectando con especial fuerza a los jóvenes del Afganistán. Condeno la reciente ola de horrendos atentados dirigidos contra establecimientos de enseñanza, en particular contra una escuela de niñas de la provincia de Nangarhar y un centro de enseñanza de Kabul. Esa violencia, sumada al presunto cierre de escuelas por elementos antigubernamentales, representa una agresión contra el derecho fundamental y constitucional de todos los afganos a la educación. La tipificación en el nuevo Código Penal de los delitos relacionados con niños es una medida esencial para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, en particular frente al reclutamiento y la utilización por grupos armados, por lo que debe dársele cumplimiento. Celebro la

buena disposición del Gobierno del Afganistán para tratar de esos temas sensibles y de todos los asuntos relacionados con los jóvenes en atención a las necesidades de ese grupo de edad, que es el más numeroso de la población afgana. Acojo con beneplácito la selección en junio de 2018 del Representante de la Juventud del Afganistán ante las Naciones Unidas como oportunidad de profundizar en esa buena disposición, en particular por lo que se refiere al papel de las Naciones Unidas.

65. Encomio al Gobierno por el empeño puesto en mejorar la capacidad del sistema de justicia formal en cuanto a juzgar y resolver causas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, las graves restricciones a la obtención de reparación en casos de violencia sexual y por razón de género, así como el alto grado de impunidad de hecho que afecta a todos los ciudadanos del Afganistán, ponen de manifiesto la necesidad de perseverar en la promoción y la protección de los derechos humanos. Aliento a las autoridades del Afganistán a que adopten todas las medidas necesarias para ayudar a la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán a desempeñar su papel fundamental como institución eficaz e independiente.

66. Me siento alentado por los esfuerzos emprendidos por los órganos de gestión electoral del Afganistán a fin de prepararse en medio de circunstancias complejas para las elecciones programadas para el 20 de octubre de 2018. La preparación por primera vez de una lista de votantes que vincule a cada votante con una mesa de votación supone un avance considerable en el fortalecimiento de la integridad de las elecciones. A la vez, me preocupa que locales de la Comisión Electoral Independiente, tanto en su sede como en algunas provincias, hayan sido bloqueados por manifestantes que impugnaban la exclusión por la Comisión de determinados candidatos. Ese tipo de actos retrasa las actividades legítimas de la Comisión Electoral Independiente sin promover ninguna causa democrática. Exhorto a los manifestantes a que pongan fin de inmediato a todo obstáculo a la labor de la Comisión Electoral Independiente.

67. Aunque los preparativos técnicos puntuales y creíbles son esenciales, en sí mismos no pueden despejar las preocupaciones políticas. La responsabilidad primordial para el éxito de unas elecciones recae en los dirigentes políticos de todo el espectro político. Ello comprende la responsabilidad de tomar parte constructiva y pacífica en el proceso, prevenir y desalentar el fraude y abstenerse de presentar los casos de irregularidad, o sencillamente unos resultados desfavorables, como pruebas de unas elecciones fraudulentas. En consecuencia, me preocupa mucho la amenaza de que las elecciones sufran un boicot.

68. Se pierde algo valioso cuando los agentes políticos deciden retirarse de un proceso electoral. Cuando eso ocurre, los ciudadanos cuentan con menos opciones de participar y de hacer oír su voz, y solo les queda el recurso a expresiones más limitadas de protesta o a la abstención. En consecuencia, insto a todos los dirigentes políticos a que sigan tomando parte en el proceso electoral y a que se dirijan a las autoridades electorales nacionales en relación con las preocupaciones o las quejas fundamentadas que tengan. Aliento a las autoridades nacionales a que sigan previniendo y detectando de forma activa las posibles irregularidades y a que examinen las pruebas de posible conducta indebida cuando se pongan en su conocimiento. Las Naciones Unidas seguirán respaldando y asistiendo a las autoridades electorales del Afganistán facilitándoles conocimientos técnicos y apoyo de otro tipo en reconocimiento del liderazgo y la titularidad afganos al frente de este proceso soberano.

69. El año en curso el Afganistán está en vías de reunir ingresos suficientes para sufragar el 50% de su presupuesto operacional. Aunque esta tendencia es indicio del potencial de ulterior financiación para el desarrollo y de la posibilidad de generar crecimiento, van surgiendo necesidades de emergencia extrema, en particular en vista

de los niveles de desplazamiento interno y del hecho de que el país atraviesa la peor sequía sufrida en los últimos diez años. Como se examinó en la reunión de la Junta Mixta de Coordinación y Supervisión celebrada en Kabul el 18 de julio, la complejidad de los problemas a los que hace frente simultáneamente el Afganistán en el ámbito humanitario y del desarrollo reviste de un carácter especialmente oportuno a las deliberaciones que se prevé mantener en la Conferencia Ministerial de Ginebra.

70. La Conferencia Ministerial de Ginebra sobre el Afganistán ofrecerá valiosas oportunidades, a la comunidad internacional de renovar su compromiso político con el Afganistán y al Gobierno de demostrar avances en el cumplimiento de compromisos fundamentales. La Conferencia se celebrará en una coyuntura fundamental, a medio camino entre la Conferencia de Bruselas sobre el Afganistán de 2016 y la siguiente conferencia sobre promesas de contribuciones, programada para 2020. A medida que se aceleren los preparativos, exhorto al Gobierno a que oriente sus esfuerzos unificados hacia el cumplimiento de los compromisos fundamentales anteriores a la Conferencia de Ginebra.

71. Doy las gracias a todo el personal de las Naciones Unidas en el Afganistán y a mi Representante Especial, Tadamichi Yamamoto, por su constante dedicación, en condiciones muy arduas, para cumplir nuestros compromisos en apoyo del pueblo del Afganistán.